



## **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, diez (10) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)**

Demandante: ANA LUCÍA LÓPEZ RESTREPO  
Demandados: ACP COLPENSIONES y PORVENIR S.A.  
Radicado: 05001 31 05 026 2023 00228 01  
Sentencia: S-315

### **SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA**

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en este acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el **recurso de apelación** interpuesto por **PORVENIR S.A.** y por **COLPENSIONES**, e igualmente conocer del asunto en grado jurisdiccional de **CONSULTA** en favor de esta última entidad, contra la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Veintiséis Laboral del Circuito de Medellín el día 31 de julio de 2023.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

### **PRETENSIONES**

ANA LUCÍA LÓPEZ RESTREPO demandó a PORVENIR S.A. y a COLPENSIONES, pretendiendo se declare la nulidad y/o ineficacia del

traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad -RAIS-, debiéndose declarar válida, vigente y sin solución de continuidad la afiliación al Régimen de Prima Media -RPM-; asimismo que nunca obtuvo una reasesoría antes de cumplir los 47 años de edad, perdiendo la posibilidad de trasladarse y que, por ende, es COLPENSIONES quien le debe reconocer la pensión de vejez una vez acredite los requisitos para acceder a dicha prestación.

En consecuencia, solicita se ordene a PORVENIR S.A. trasladar a COLPENSIONES los aportes realizados, incluidos rendimientos y sin ningún descuento por cuotas de administración, debiendo este último fondo reactivar la afiliación y recibir los aportes trasladados. De igual forma solicita se condene a COLPENSIONES a reconocer y pagar la pensión de vejez desde el cumplimiento de los requisitos junto con los intereses moratorios y/o indexación. Asimismo, se condene a las demandadas a las costas procesales.

Subsidiariamente solicita, que se declare que al no obtener reasesoría justo antes de cumplir 47 años por parte de PORVENIR S.A., éste fondo a título de indemnización de perjuicios, debe reconocer como mesada pensional, el valor equivalente a lo que esta hubiese recibido si estuviera en el régimen de prima media.

## **LOS HECHOS**

Expone, como fundamento de sus peticiones, que nació el 13 de octubre de 1957, que se afilió al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y realizó aportes entre el 4 de abril de 1993 y el 1° de marzo de 1997, para un total de 38.71 semanas. Que se trasladó a PORVENIR S.A. el 2 de enero de 1997; que cotizó en el RAIS 1.213 semanas y 1.247 en toda su vida laboral; que para la fecha de su traslado devengaba \$734.000; que la AFP, al momento del traslado, no le suministró información consistente en el saldo que debía acreditar en su cuneta de ahorro individual, tampoco a qué edad se le redimiría el bono pensional, ni mucho menos

la diferencia entre un régimen y otro; que nunca se le informó la prohibición legal de regresar antes de que le faltaran 10 años para adquirir la edad para optar por su derecho pensional; que le fue realizado un cálculo por parte de PORVENIR S.A. en el que se le indica que su mesada a los 63 años sería de 1 SMLMV y que radicó solicitud a COLPENSIONES para tener como ineficaz la afiliación al RAIS, la cual no fue favorable.

### **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

Al contestar, COLPENSIONES acepta la fecha de nacimiento de la demandante y la afiliación a este fondo público, pero aclara que cotizó allí del 4 de abril de 1994 hasta 31 de enero de 1995 para un total de 38.71 semanas; es cierta la petición elevada para el traslado y que no le constan los demás hechos, los cuales van dirigidos en contra de PORVENIR S.A. Se opuso a las pretensiones por carecer de sustento fáctico y jurídico. Como excepciones propuso que se otorga un alcance que no corresponde al contenido de los decretos 663 de 1993 y 692 de 1994, buena fe, prescripción, carga dinámica de la prueba, el retorno en cualquier tiempo al RP, desconocimiento del principio de la sostenibilidad financiera del sistema; compromiso de un afiliado de permanecer en un régimen pensional, indebida aplicación de las normas en materia de asesoría de traslado pensional y desconocimiento del precedente.

PORVENIR S.A. indicó a los hechos que no le consta la fecha de nacimiento como tampoco los hechos que están relacionados con COLPENSIONES; que respecto a la afiliación a este fondo se atiene al formato de vinculación y con relación a la información brindada manifiesta que a la actora se le informó ampliamente sobre las implicaciones de su decisión, sobre el funcionamiento del RAIS y de sus condiciones pensionales tal como se aprecia en la solicitud de vinculación, razón por la cual el traslado se considera válido dentro de los términos establecidos en la ley de acuerdo con el artículo 60 de la

ley 100 de 1993, en el cual se especifica las características del régimen. Se opuso a todas las pretensiones. Y propuso como excepciones prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación y compensación.

### **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

Mediante sentencia del 31 de julio de 2023, el Juzgado Veintiséis Laboral del Circuito de Medellín, 1) **DECLARÓ** la ineficacia de la afiliación a PORVENIR S.A. de la demandante; 2) **CONDENÓ** a PORVENIR S.A. a trasladar a COLPENSIONES el valor de la cuenta de ahorro individual de la actora con sus respectivos rendimientos financieros, incluidos las cuotas de administración, primas previsionales, porcentajes de garantía de pensión mínima, todo debidamente indexado, incluyendo la devolución del bono pensional en caso tal de que ya haya sido abonado a la cuenta de ahorro individual, y esto deberá ser acompañado de los soportes que permitan a Colpensiones conocer el valor del IBC mes a mes sobre cada uno de los aportes realizados por la demandante; 3) **ORDENÓ** a COLPENSIONES que una vez reciba las sumas que le fueron ordenadas a PORVENIR S.A., las convierta en semanas efectivamente cotizadas y la tenga por afiliada al RPM sin solución de continuidad, actualizando su historia laboral; 4) **CONDENÓ** a COLPENSIONES a que una vez reciba dichas sumas reconozca la pensión de vejez a la demandante desde el día siguiente a la última cotización, teniendo en cuenta los artículos 13 y 35 del decreto 758 de 1990, y el 21 y 34 de la ley 100 de 1993, y en razón de 13 mesadas anuales; y 5) **CONDENÓ** en costas a PORVENIR.

### **DEL RECURSO DE APELACIÓN**

Interpuesto por la apoderada de COLPENSIONES, solicitó revocar la sentencia de manera parcial, ya que esta entidad es un tercero al negocio jurídico celebrado entre la demandante y el fondo privado, por lo que no puede verse perjudicado de un error en el que incurrió la demandante al efectuar actos libres y voluntarios, pues no se ejerció

ningún tipo de fuerza al firmar formulario de afiliación, y además de que recibir a la actora descapitalizaría al régimen público. Que debe tenerse en cuenta el interrogatorio practicado y las confesiones de la demandante, pues se observa que esta contaba con el consentimiento de pertenecer al RAIS y no a COLPENSIONES; que la pensión debe ser reconocida por PORVENIR S.A. entidad en donde se encontraba la actora al cumplir los requisitos y esto con la intención de evitar un detrimento patrimonial, y además la demandante sigue cotizando al sistema por lo tanto no hay retiro; y que no debe ser condena en costas por que su actuar está en marcado bajo el principio de la buena fe.

PORVENIR S.A. presenta su recurso de forma parcial, señalando que no se deben devolver conceptos distintos a los señalados en el artículo 113 de la ley 100 de 1993 en caso de traslados, toda vez que los gastos de administración obedecieron a los descuentos ordenados en el artículo 20 de la ley 100 de 1993, los cuales era para la administración de la cuenta de la actora, y con esto la misma obtuvo unos rendimientos del 64%, que duplicó los aportes y que con muy superiores a los que la demandante hubiese podido recibir en el RPM; que además se debe dar por probada la excepción de prescripción, ya que estos conceptos a devolver no van a financiar la pensión, y por lo que generan un enriquecimiento sin justa causa a favor de COLPENSIONES; que tampoco son procedentes los seguros previsionales, ya que se contrató con terceros ajenos para el cubrimiento de alguna contingencia; y que tampoco debe proceder la indexación ya que los rendimientos superan con creces dicha devaluación económica, y al ordenarse devolver indexado se estaría generando una doble condena.

Así mismo, el proceso se conoce en grado jurisdiccional de **Consulta** a favor de COLPENSIONES.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:**

Una vez surtido el traslado respectivo, la parte demandante solicita se confirme la sentencia, toda vez que, al momento de efectuar el traslado inicial de régimen pensional, no le brindó una asesoría clara, completa y eficiente, que le permitiera tomar una decisión consiente sobre las implicaciones que en su futuro pensional tendría dicho traslado, por lo cual, ante la falta de esa asesoría, no puede hablarse que el traslado de régimen se dio de manera libre y voluntaria, así las cosas, al no ser libre y voluntaria la decisión por el desconocimiento de las consecuencias que este le ocasionaría, el mismo se torna ineficaz, tal y como lo indica el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 en concordancia con el artículo 271 del mismo texto normativo; y que se debe seguir la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia.

PORVENIR S.A. pide revocar íntegramente la sentencia de primera instancia, toda vez que no se alegó y menos probó, los eventos previstos en el artículo 1741 del Código Civil, para declarar la nulidad absoluta o siquiera relativa del acto jurídico del traslado, lo que conduce a que este acto goce de plena validez; que se le garantizó el derecho de retracto y la libre escogencia; que sí se acreditó el deber de información; que no se pueden imponer cargas probatorias distintas a las previstas en la ley; que debe ser analizada en conjunto todas las pruebas; que se debe mirar la buena o mala fe de las partes en las restituciones mutuas; y que no se debe imponer la indexación.

### **CONSIDERACIONES:**

Se procede a desatar el recurso de apelación interpuesto tanto por PORVENIR S.A. como por COLPENSIONES, en contra de la sentencia de primera instancia, e igualmente conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA en favor de COLPENSIONES conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado acreditados, se encuentran los siguientes: **i) ANA LUCÍA LÓPEZ**

RESTREPO nació el 13 de octubre de 1957; *ii)* se afilió al sistema pensional en el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y comenzó a realizar cotizaciones allí, el 4° de abril de 1994, contando con un total de 38.71 semanas cotizadas<sup>1</sup>; y *iii)* que suscribió formulario de vinculación ante la AFP PORVENIR S.A. el día 2 de enero de 1997<sup>2</sup>, entidad a la cual se encuentra actualmente vinculada.

Ahora bien. La diferencia jurídica que se plantea en este caso, consistente en la pretensión de la parte actora en punto que se declare ineficaz el traslado que efectuó desde el Fondo público y común administrado por el ISS, al Fondo privado de ahorro individual, fundada en una insuficiente información por parte de esta última entidad en cuanto a las consecuencias reales de dicha determinación, ha sido materia de múltiples decisiones judiciales orientadas desde la cúspide de la jurisdicción ordinaria laboral.

Si bien es cierto, en principio, tal traslado se hizo como producto de un concurso de voluntades entre personas plenamente capaces, no lo es menos que se presentaba una relación asimétrica en el sentido de que los Fondos privados como agentes del sector financiero de la economía, tenían, desde su creación, el deber legal de suministrarle al afiliado una explicación completa pero concreta, hecha a la medida de la situación particular del interesado, de la consecuencias del traslado y con la esencial finalidad de que este pudiese tomar una decisión informada sobre un aspecto ligado a su proyecto de vida futura.

En efecto, desde la expedición del decreto 663 de 1993<sup>3</sup>, o Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el que en su Capítulo VIII incluye a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, dispuso dicha obligación en los siguientes términos:

---

<sup>1</sup> Folios 67 a 69 de la contestación de COLPENSIONES

<sup>2</sup> Folios 111 de la contestación de PORVENIR S.A.

<sup>3</sup> Norma posteriormente actualizada por la ley 795 de 2003 *“ley por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico Financiero”*

*“Art 97. **Información a los usuarios.** Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan, la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claro y objetivo, escoger las mejores opciones del mercado.*

Por su parte, la Ley 100 de 1993 también intervino el punto, pues en su artículo 271 estableció:

*“Art. 271. **Sanciones para el Empleador.** El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a una multa, impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder 50 veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”*

Así mismo, importa señalar al respecto, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada, pacífica y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación, advirtiendo, además, que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una afirmación indefinida como lo es el hecho que la persona afiliada no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba positiva por la cual se acredite que tal obligación sí se cumplió.

Tesis que se introdujo desde las sentencias 31.989 y 31.314, ambas del 9 de septiembre de 2008, por cuenta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años a través de



múltiples pronunciamientos. Cabe destacar lo que se dijo en aquellas primeras providencias, así, en la Rad. N.º 31.989 de 2008:

*“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.”*

Del desarrollo jurisprudencial posterior se evidencian algunos ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente:

- (i) El juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico;
- (ii) El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues ello no demuestra por si solo que se hubiere brindado una información idónea, y se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado;
- (iii) Le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y

- (iv) No es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no se observan pruebas fehacientes que permitan tener por acreditado que el fondo privado brindó, en el momento del traslado, una información integral de las condiciones subjetivas de la afiliada, con explicación de las ventajas y desventajas de la reubicación entre regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que aquel pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, el Fondo privado incumplió su deber de información, al no suministrar, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

Del interrogatorio de parte absuelto por la actora, no se vislumbra confesión alguna respecto del cumplimiento a ese deber de información, manifiesta simplemente la demandante sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del traslado de régimen que, cuando ella estaba trabajando con el Instituto Municipal de Salud en el año de 1997, PORVENIR S.A. les hizo una visita y los reunieron para explicarles todas las bondades del sistema como por ejemplo que tendrían las mismas condiciones de los 2 regímenes y que la pensión podía pasar como una herencia a la familia, pero sin explicarle como se generaría la pensión; y también le manifestaron que las semanas cotizadas al ISS pasarían como un bono pensional, pero que PORVENIR S.A. haría todo el trámite.

De lo anterior no se deriva –entonces- que aparezca clara la prueba de un reconocimiento de que los promotores del Fondo privado hubieron informado en detalle las diferencias jurídico-financieras de los sistemas pensionales, con expresión de sus características propias, así como las repercusiones que una decisión de semejante calado podría traerle a la afiliada al momento de hacer efectiva la prestación.

Lo dicho permite dar aplicación al citado artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

Ahora bien; tampoco es de recibo el argumento de COLPENSIONES en cuanto solicita considerar las implicaciones económicas que se pueden llegar a generar con decisiones como ésta, especialmente por existir una eventual afectación a la sostenibilidad financiera del sistema más cuando no participó en el acto de traslado, siendo un derecho que ejerció la demandante en su momento y permitido según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003.

El principio de sostenibilidad financiera de las pensiones, entronizado en el Acto Legislativo 01 de 2005, está orientado a lograr el aseguramiento de su propia subsistencia. Esto es, se impone la garantía de que se pueda contar con los recursos necesarios para reconocer y pagar las diversas prestaciones a los afiliados al sistema, presuponiendo la limitación de los recursos disponibles, y que, por ello mismo, deben ser distribuidos de acuerdo con las necesidades de la población, buscando la efectividad de los derechos y la eficacia y solidaridad del sistema. Y para esto es indispensable asegurar el pago efectivo de las cotizaciones, aunado al concurso del Estado cuando ello sea requerido, de tal modo que el sistema sea viable para el pago de las pensiones de los actuales y futuros pensionados.

En casos como el presente, el regreso de la demandante al RPM no implica que necesariamente vaya a haber una afectación al sistema, pues a dicho fondo le llegan los dineros que la demandante alcanzó a acumular en el Régimen de Ahorro Individual. junto con los rendimientos financieros y todos aquellos conceptos recibidos por

administración de los recursos, seguros y garantía de pensión mínima como más adelante se verá, sin que esté probado en el proceso que no sea posible financiar la pensión a la que pueda llegar a acceder.

En consecuencia, en este puntual aspecto se **CONFIRMARÁ** la decisión adoptada en primera instancia.

### **Conceptos a trasladar**

De otro lado, en cuanto a la decisión de ordenar también la devolución de las cuotas de administración, seguros previsionales y demás conceptos, tema objeto de apelación por parte de PORVENIR S.A., basta con indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos, que es factible ordenar a la AFP correspondiente, que proceda con la devolución a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como las ya citadas, pero con mayor énfasis en otras como la SL 4964 de 2018 o la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, rememorada en las sentencias SL 5595 de 2021 y SL 1637 del 11 de mayo de 2022, en las que dijo expresamente lo siguiente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que*

este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.

(...)

En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional."

Todo lo anterior sin que resulte procedente la declaratoria de prescripción, toda vez que no se cumplen las condiciones para tal efecto según ha sido tratado en múltiples providencias, como por ejemplo en la sentencia SL 2058 del 4 de mayo de 2022, rad. 89282:

"En cuanto a la excepción de prescripción, se reitera que la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales es imprescriptible. En efecto, a diferencia de los derechos de crédito y obligaciones, los hechos o estados jurídicos no están sujetos a prescripción. Por ello, puede solicitarse en cualquier tiempo la declaratoria de ineficacia del acto de afiliación, en la medida que esta declaración tiene como objetivo comprobar o constatar un estado de cosas -carencia de efectos jurídicos del acto desde su nacimiento- surgido con anterioridad al inicio de la litis (CSJ SL1688-2019, reiterada en la CSJ SL1421-2019, CSJ SL4426-2019, CSJ SL4360-2019 y CSJ SL373-2021)."

Además, tampoco puede hablarse de prescripción de los dineros descontados por concepto de cuotas de administración, seguros y reaseguros y fondo de garantía de pensión mínima, toda vez que cualquier obligación que surja a cargo de la respectiva AFP, como ciertamente lo es la de restituir estos conceptos, se origina con la declaratoria de ineficacia del traslado que solo se produce con la ejecutoria de la sentencia, sumado al hecho de que tales conceptos

están llamadas a integrar el capital indispensable para la consolidación y financiación de la prestación, y en consecuencia, al estar ligados de manera indisoluble con el estatus de pensionado, no pueden estar sometidas a la prescripción.

Se advierte igualmente que la orden a PORVENIR S.A. de trasladar los conceptos mencionados, es decir, las cuotas de administración, seguros previsionales y aportes destinados al fondo de garantía de pensión mínima deben incluir la respectiva ***indexación***, pero aclarándose que es solo sobre estos conceptos, pues así lo ha entendido igualmente la propia jurisprudencia ya citada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

En ese aspecto, dicha Corporación ha ordenado tal indexación y lo ha hecho en sentencias como las ya citadas, pero de forma más clara en las sentencias SL 3349-2021, SL359-2021 y SL3394-2022, en las que concluyó, entre otras cosas, que uno de los efectos de la declaratoria de la ineficacia de traslado de régimen pensional, es que “... *todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones, esto es, que mantendrán su poder adquisitivo inicial, por lo que se deben indexar.*”

Conforme a las ordenes anteriores, no se puede pasar por alto los reiterados pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias SL-843-2022, SL-755-2022 y SL-756-2022, en donde se impone a las AFP privadas la obligación de que junto con las sumas objeto de traslado, se entregue información donde los conceptos trasladados aparezcan discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

Así pues, para esta Sala es válido que se exija una claridad en los valores y conceptos a devolver, por lo que se deberá confirmar las condenas proferidas, reiterando que, al momento de efectuar el traslado de los diferentes valores a COLPENSIONES, todos los conceptos aparezcan discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen, tal y como lo señaló el juez.

Por otro lado, en lo que tiene que ver con la orden del a quo, de reintegrar a COLPENSIONES el bono pensional que se pudiera haberse pagado a favor de la actora, tal decisión resulta imprecisa, toda vez que al ser ineficaz la afiliación de la demandante al RAIS, no se origina el derecho a bono pensional, al menos el tipo A, y por tal razón, si el referido bono fue pagado se debe efectuar la devolución al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, y no a COLPENSIONES, por lo que tal orden será **precisada**.

### **Pensión de vejez**

Finalmente, no existe duda alguna en cuanto a que, según lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, la demandante acredita todos los requisitos para tener derecho a la pensión de vejez, pues al haber nacido el 13 de octubre de 1957, significa que los 57 años los tiene acreditados desde el mismo día y mes del año 2014.

De otro lado, de acuerdo al reporte de cotizaciones que fue aportado con la contestación de la demanda proferido por el fondo privado PORVENIR S.A., con fecha de generación del 14 de diciembre de 2022, se evidencia que la actora acreditaba, para ese entonces, un total de 1.321 semanas cotizadas en toda su vida laboral, las que resultan superiores a las 1.300 exigidas en aquella disposición legal, por lo que la decisión del Juez de primera instancia de reconocer la pensión de vejez se encuentra ajustada a derecho.

Sin embargo, en lo que tiene que ver el disfrute de la prestación, aplica la necesidad ineludible en casos como este de acreditar la desafiliación del sistema. Incluso, el fundamento para adoptar esa decisión no son solo los artículos 13 y 35 del decreto 758 de 1990 que hacen referencia a la causación y disfrute de la pensión de vejez, sino también que esas cotizaciones que se vienen realizando pueden tener incidencia en el valor final de la prestación que se va a reconocer, en los términos del artículo 21 de la ley 100 de 1993.

Lo anterior debido a que la propia demandante informó en su interrogatorio de parte que en la actualidad continúa realizando cotizaciones, pues labora con la Alcaldía de Pereira, por lo que le corresponderá a COLPENSIONES, cuando tenga los dineros de la cuenta individual que la demandante posee en PORVENIR S.A., liquidar y comenzar a pagar la prestación una vez se acredite el retiro, tal y como lo indicó el juez en la sentencia.

En consecuencia, la decisión de primera instancia deberá ser **CONFIRMADA**.

Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A. y COLPENSIONES, por haber sido vencidas en el recurso, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1'160.000, dividido en partes iguales para cada una.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **R E S U E L V E:**

**CONFIRMAR** la sentencia proferida por el Juzgado Veintiséis Laboral del Circuito de Medellín del 31 de julio de 2023, pero **PRECISANDO** que en el evento tal que se hubiese pagado bono pensional tipo A, en



favor de la demandante, la devolución del importe correspondiente debe efectuarse al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, no a COLPENSIONES. Respecto del importe de bono pensional distinto al tipo A, se confirma que debe ser entregado a COLPENSIONES. Y se **ACLARA** en el sentido que la orden dada a la AFP PORVENIR S.A. en lo que respecta a la indexación, solo es frente a los conceptos de cuotas por administración, aportes para el fondo de garantía de pensión mínima y los seguros previsionales de invalidez y sobrevivientes.

Costas como se dijo en la parte motiva de esta providencia.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **aedae470eb7c9b95879558cc76b699fa677dc4ad50f581e78603d915ceefb649**

Documento generado en 10/11/2023 03:33:12 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>